

LA GESTIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE LA DIGNIDAD INTEGRAL DE LAS PERSONAS: EL CASO DE CHILE Y SU ACTUAL PROYECTO DE REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Por Gerardo Ubilla Sanchez

Cuando se discute qué tan importante es la gestión pública para el logro de una sociedad desarrollada, en la que todos los habitantes tengan igualdad de oportunidades, acceso a la cultura, una vivienda digna, sin violencia social, con alta capacidad cívica, consciencia ambiental, etc., sin duda las miradas se enfrentan. Para unos, el mercado debe imperar, manteniéndose el Estado lo más lejos posible, puesto que entienden que la eficiencia administrativa es monopolio de los privados; se debe buscar la libertad individual y el emprendimiento personal, puesto que las personas tienen un potencial de innovación que, en caso de protagonismo estatal, disminuiría.

Por otra parte, hay quienes postulamos que el Estado debe garantizar derechos mínimos, ya que si cede (como lo ha estado haciendo desde la década de 1970 a la fecha en Chile) está condenando a un gran sector de la población- que no puede adquirir ámbitos claves para el desarrollo humano de una nación, como la salud, vivienda y educación- al mundo privado. Chile destaca en el concierto internacional por un costo de vida muy alto, con mensualidades universitarias que superan los 450 dólares, establecimientos de educación primaria y secundaria segregados, en donde se recibe a estudiantes según la capacidad de pago de sus familias (hay colegios que cobran 5.000 dólares al año), estableciendo una prueba de selección universitaria (PSU) como requisito de ingreso a la universidad; es decir, mantiene una educación para ricos, clase media y pobres y, al término de la enseñanza secundaria, los mide con la misma evaluación, ¿qué más desigual que eso?

La salud es otro tema preocupante, tenemos claramente excluida a la población más vulnerable de tratamientos costosos, puesto que desde la década de 1980 se implementó un sistema de salud privado (ISAPRES) que, a diferencia del estatal, entrega mayores garantías de vida a nuestros enfermos. ¿Es posible que un país esté dispuesto a entregar áreas estratégicas para su desarrollo humano al sector privado, arriesgando que este se aproveche de las especulaciones del mercado, generando a su vez utilidades a costa del bienestar de la población? Sí, Chile es uno de aquellos.

Ahora bien, “Chile es la economía regional que más ha crecido desde los años 80 y suele ser encomiada como modelo virtuoso para el resto de la región. Sin embargo, el informe de 2015 de la OCDE, que agrupa a 34 naciones de altos ingresos, subraya los niveles de desigualdad en la sociedad chilena. Chile sigue siendo una sociedad altamente desigual en términos de ingresos, educación y bienestar. El mercado laboral muestra una dualidad que redundo en una muy desigual distribución salarial. En efecto, el 10% más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre. En el índice de Desarrollo Humano de la ONU, Chile pierde 13 puntos una vez que se suma la desigualdad conjunta de ingresos, acceso a salud y educación. Así, en la medición de desigualdad del Banco Mundial, Chile aparece en el decimocuarto lugar a nivel mundial y en el sexto de las economías de la región. Debido a la limitada intervención estatal, la situación empeora cuando se considera también el acceso a la salud y la educación”¹.

Lo declarado por la OCDE y el Banco Mundial² sobre Chile, nos reafirma que estamos en presencia de una necesidad urgente de cambio. Justamente es lo que se ha estado apreciando en el actual y segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet³ (médico y política, abanderada del Partido Socialista, primera mujer presidente de América y primera en asumir el

máximo cargo de ONU Mujeres), a través de la implementación de políticas públicas de cambio estructural en los ámbitos tributario, constitucional y educacional, todos muy cuestionados por la oposición y la ciudadanía. Ahora bien, como ejemplo de intervención estatal y tensión con el mundo privado, nos detendremos en el análisis de una de sus grandes políticas públicas, recientemente enviada al Congreso para su discusión, la reforma a la Educación Superior.

Dime qué tipo de educación tienes y te diré qué tipo de país eres...

El debate sobre la Educación Superior de Chile está en su más álgido momento debido al proyecto de ley que acaba de enviar el gobierno al Congreso⁴. Este, en términos generales, busca regular la calidad de las instituciones superiores, prohíbe el lucro y establece la gratuidad progresiva, defendiendo la educación como derecho social y no como un bien al servicio del mercado. Quizás es este último punto el que ha despertado mayor debate, es claro, la educación del Chile de los últimos 30 años es un producto vendible, adquirido por aquellos privilegiados que les tocó asistir a un colegio de mayor “nivel”, producto de la capacidad de pago de sus familias.



El lucro se ha instalado en todos los niveles: pre-escolar, primaria, secundaria, superior y diferencial (educación dirigida a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales). Por otra parte, aquellos estudiantes de sectores populares o clase media, que tienen las capacidades para ingresar a una universidad de mayor exigencia académica hipotecan sus vidas con créditos bancarios altísimos, endeudándose por 15 o 20 años⁵.

Hay quienes sufren las consecuencias del sistema, obtienen bajos puntajes en la PSU y se matriculan en instituciones de Educación Superior de dudosa calidad, quienes juegan con sus sueños y los tratan como clientes sin derecho a organizarse en alguna federación que defienda sus intereses colectivos. Es alarmante que una gran mayoría de estudiantes chilenos no sean más que piezas de ajedrez de empresarios de la educación (sólo un 11% asiste a instituciones estatales, quienes cobran mucho más que instituciones privadas), que no apuntan a la generación de conocimiento ni al desarrollo humano de la nación, sino a un beneficio propio: la acumulación de riqueza a costa de los sueños de miles de jóvenes.

A partir de la mercantilización de la educación superior chilena⁶, que nace en los años 80 y se profundiza en las posteriores décadas, con más de un millón de estudiantes involucrados al año 2016, el Estado ha facilitado la apertura de instituciones, permitiendo abrir Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica o Universidades con la misma facilidad que se abre una pastelería, ¿su resultado? 180 instituciones de educación superior funcionando a la fecha, de las cuales 60 son universidades ¡¡¡una sobre oferta perversa!!! El negocio ha sido redondo puesto que la fiscalización es escasa y su funcionamiento continúa a pesar de algunas no cuentan con una acreditación de calidad mínima. Existen casos de facultades y carreras de pedagogía que se someten al proceso de acreditación que establece el Estado, y a pesar que no lo aprueban continúa abierta la matrícula de alumnos, poniendo en duda la calidad de los futuros profesores que terminarán (de)formando a nuestros niños y jóvenes en las escuelas, el círculo es vicioso.

Con todo, es claro por qué los mercaderes de la educación y sus representantes políticos se han opuesto al proyecto de ley del gobierno en materia de Educación Superior, claramente

atenta contra sus intereses, ese Estado neoliberal ausente intenta intervenir cada vez más, el trasfondo del proyecto es entender que el derecho a la educación no puede estar al servicio de la oferta y la demanda, menos en un país tan desigual como Chile. Es cierto, fue el mismo Estado quien les cedió terreno y los dejó hacer y deshacer con miles de familias chilenas, pero nada es para siempre y en algún momento se les debe acabar el negociado.

Otro aspecto importante del proyecto de reforma a la educación superior que plantea el gobierno de la presidenta Bachelet es la dependencia de la gratuidad universal a los vaivenes de la economía nacional e internacional, esto porque la tan anhelada gratuidad universal dependerá del PIB tendencial, que corresponde a la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo. Vale decir, no se prioriza el gasto social estatal hacia el desarrollo de una educación al servicio del desarrollo humano (inversión), sino que se pone por encima una variable macroeconómica que puede o no puede darse, generando una incertidumbre en aumento y la molestia de los estudiantes y sus familias.

Algunos sectores que por supuesto se oponen a la gratuidad universal plantean “es mucho dinero el que se necesita para financiar la educación superior, no alcanza” (según informe del propio gobierno se necesitan alrededor de 3 millones de dólares al año), no obstante, los últimos casos de corrupción conocidos, donde políticos y empresarios se coluden para obtener diez veces lo que se necesita para educación superior, los últimos casos de gasto ilegal en el presupuesto de las fuerzas armadas (Las Fuerzas Armadas chilenas tienen a su disposición el 10% del dinero que el país gana por la explotación del cobre, es decir, casi 5 mil millones de dólares al año) o las utilidades estratosféricas de las grandes empresas o las multinacionales que operan en Chile nos hacen pensar que dinero hay y es el Estado quien tiene el deber de intervenir, aumentando la carga tributaria, fiscalizando como corresponde o reintegrando a su gestión un área importante y clave para su desarrollo, la educación, ya se comprobó que el privado/mercado no lo hace bien.

La gestión pública, una herramienta estratégica al servicio del desarrollo humano de las naciones.

La gestión pública es clave para frenar los oscuros intereses privados que buscan utilidades a costa de los sueños de miles de niños y jóvenes. No se trata de eliminar la propiedad privada o al mercado y, a través de ello, aislar a Chile del concierto internacional, cada día más globalizado y conectado desde un punto de vista económico, sino resguardar los intereses de toda la población. Ningún Estado debe permitir brechas de desigualdad tan grandes como en Chile y muchos países latinoamericanos (compartimos el ranking de los 15 países más desiguales del mundo según el último informe del Banco Mundial con Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Guatemala y Panamá).

Nos falta definir cuál es la sociedad que queremos para nuestros hijos y nietos, para su felicidad y bienestar, una sociedad garante de derechos universales mínimos, que no separe a sus habitantes desde que nacen por su capacidad económica. No queremos escuelas para unos y para otros, barrios para unos y para otros, cárceles para unos y para otros, hospitales para unos y para otros e instituciones de educación superior para unos y para otros. Hasta el 2016 eso es lo que hemos hecho, en gran parte del mundo los pobres asumen los costos de un sistema económico muy desigual, lo afirmó el Papa Francisco en su gira sudamericana de 2015, “un desarrollo económico que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados, no es verdadero desarrollo.

La medida del modelo económico ha de ser la dignidad integral del ser humano, especialmente el más vulnerable e indefenso”, y es esa dignidad integral la que debe ponerse en el centro de toda gestión pública, representar a la ciudadanía que decide directa e indirectamen-

te a través del sufragio quiénes administran el aparato estatal. No podemos permitir que los dueños del capital mantengan secuestrada la gestión pública (comprando políticos), está claro que no lo quieren ni querrán hacer, por tanto, vamos todos juntos a liberarla, nuestros niños y jóvenes lo agradecerán.

BIBLIOGRAFÍA

¹En: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab.

Extraído el 07 de julio de 2016.

²Ver publicación en <http://www.bancomundial.org/publicaciones/>

³Médico y política, abanderada del Partido Socialista, primera mujer presidente de América y primera en asumir el máximo cargo de ONU Mujeres. Su primer gobierno fue entre 2006 y 2010.

⁴Mayores detalles del proyecto de ley en <http://www.gratuidad.cl/>

⁵Estudio del Banco Mundial de 2011 determina que para el 2016 más de 460 mil estudiantes chilenos tendrán una deuda total de 5 mil millones de dólares mínimo y una deuda promedio individual de 4 millones 170 mil pesos anual. Ver en: <http://radio.uchile.cl/2014/03/06/elmo-moreno-academico-al-2016-habran-460-mil-jovenes-endeudados-con-el-cae/>

⁶Para profundizar sobre la mercantilización de la Educación Superior en Chile leer *El negocio de las universidades en Chile* de María Olivia Monckeberg, Editorial Debate, 2007, Santiago de Chile.